

Pueblos y medio ambiente en peligro

Vulnerabilidad ambiental en América Latina y el Caribe

J Timmons Roberts and Bradley C Parks



Publicado por el Instituto Católico de Relaciones Internacionales
(Catholic Institute for International Relations - CIIR)
Unit 3, 190a New North Road,
London N1 7BJ, UK

© J. Timmons Roberts y Bradley C. Parks 2004

J. Timmons Roberts y Bradley C. Parks se reservan el derecho de ser identificados como los redactores de este trabajo de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988

ISBN 1 85287 312 4

Publicado por primera vez en 2004 bajo el nombre de *People and the environment on the edge: Environmental vulnerability in Latin America and the Caribbean* (ISBN 1 85287 309 4)

Traducción: Isolda Montero



En algunos países, el CIIR opera como Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID)

Los autores

J. Timmons Roberts es profesor de sociología y director del programa de ciencias y políticas ambientales en la universidad de William and Mary, Williamsburg, Virginia, Estados Unidos.

Bradley C. Parks es investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo en el London School of Economics and Political Science.

Agradecimientos

Este documento se produjo con asistencia financiera de la Comisión Europea. Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente de los autores. Dichos puntos de vista no reflejan de manera alguna las opiniones oficiales de la Comisión Europea.

Introducción

Imagínese un bote de remos con dos pasajeros en medio de una tormenta tratando de alcanzar una orilla distante. Un pasajero sostiene un remo corto y roto; el otro, uno largo y dorado. El viento y las olas sacuden el bote que se llena de agua hasta la mitad a pesar de los esfuerzos continuos por sacarla. El pasajero con el remo dorado lo protege celosamente con una pistola sin que ayude a remar o a sacar el agua. Cae la noche y la costa se pierde de vista. Los pasajeros discuten acaloradamente pues no saben hacia dónde remar.

Sin gran exageración, ésta es la situación hoy en gran parte de América Latina. Conducir a la sociedad latinoamericana hacia un destino utópico de “desarrollo” y “democracia”, requiere cooperación y una embarcación social que funcione. Sin embargo, una aguda desigualdad ha creado dos grupos con medios tan radicalmente desproporcionados que conviven en mundos separados y raramente van en la misma dirección. La globalización económica que primero trajo promesas de crecimiento ahora trae marejadas gigantes que amenazan con hundir el bote a medida que los precios de las exportaciones de productos básicos se desploman y los mercados en el exterior se evaporan. El agua que llena el casco del bote es el peso acumulado de la deuda externa, la interferencia extranjera, la corrupción generalizada, los intereses creados y las ineficientes burocracias, que frenan el avance del buque y dificultan sus maniobras.

Luego queda la incertidumbre de hacia dónde remar. Algunos sostienen que las costas del “desarrollo” se alcanzarán siguiendo la ruta prescrita por instituciones basadas en Washington, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que supone recortes en el gasto público y se centra en el incremento de las exportaciones basadas en una mano de obra y recursos baratos. Otros, como los grupos comunitarios y las organizaciones no gubernamentales locales (ONGs), mantienen que tal enfoque amenaza el ordenamiento social y ambiental de sus países. Más bien demandan políticas que ofrezcan un acceso igualitario a los recursos y una restauración de los servicios públicos, para proteger así a los sectores pobres de la sociedad frente a los severos vientos que trae la globalización.

Entretanto, aunque se hayan reemplazado las dictaduras por gobiernos civiles las democracias en América Latina continúan

zozobrando. En este cuadro, los Estados nacionales intentan volver a la democracia o reconstruirla mientras al mismo tiempo luchan contra todos los problemas existentes en bote de remos; es decir, contra la profunda incertidumbre económica en un mercado mundial a menudo brutal, contra los legados históricos de desigualdades en relación a la tierra, la riqueza y la educación, así como contra la intervención constante de las instituciones internacionales y del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de cada país.

El factor común entre estas naciones son los débiles cimientos económicos. Desde la época colonial sus “desarrollos” se han basado en economías no diversificadas – principalmente en la exportación de materias primas que a su vez ha llevado a un inmenso daño y degradación del medio ambiente. El legado colonial es éste: América Latina fue incorporada a la economía mundial por los españoles, portugueses y más tarde por los ingleses y norteamericanos como un lugar donde se podían extraer recursos naturales. La febril búsqueda de oro llevó a la rápida exploración del continente americano. Los españoles y portugueses también establecieron cañaverales y molinos de azúcar por todas partes, y el azúcar se convirtió en el primer cultivo lucrativo que enviaron a Europa. Los ingleses y franceses no tardaron en desarrollar el dulce lucro en sus colonias alrededor del Caribe.

Los suelos de estas inmensas plantaciones quedaron agotados por la producción intensiva, mientras se utilizaban enormes cantidades de leña para hervir y depurar la caña. Asimismo, el tabaco, el algodón y el café fueron fundamentales para la colonización de vastas franjas de las mejores tierras en estos territorios recién abiertos. Entretanto, la esclavitud africana permitió que las elites agrícolas continuaran utilizando técnicas anticuadas lo que impidió aprovechar innovaciones que hubiesen ayudado a conservar la fertilidad del suelo.

El sistema de opresión basado en etnia y riqueza es la raíz de muchos de los problemas ambientales de la región. La desigual distribución de la tierra, que comenzó durante la colonia, se mantiene en la actualidad. Los grandes latifundios y las plantaciones frutales para exportación pertenecen a las empresas transnacionales, o son sus contratistas quienes dominan ahora las tierras bajas más fértiles. Con frecuencia a los campesinos no les queda otra alternativa más que vivir del cultivo de tierras marginales lo cual no les permite salir de la pobreza.

Quinientos años de explotación han dañado severamente los ecosistemas latinoamericanos. Al describir a América Central como una de las tres regiones más diversas del planeta, Conservation International la considera como una zona de singular riqueza de biodiversidad en el mundo. Sin embargo, allí sólo queda el 20 por ciento de su hábitat original, y los beneficios de esta biodiversidad (como la provisión de materia prima para la producción de medicinas y el mantenimiento saludable de variedades de cultivos) se encuentran bajo una creciente amenaza.

Los países centroamericanos y las naciones caribeñas como la República Dominicana se encuentran propensos a condiciones climáticas extremas y desastres naturales como huracanes y terremotos, mientras que la región de los Andes ha sufrido las consecuencias de cambios periódicos en el nivel de pluviosidad, conocidos como El Niño, un fenómeno advertido por primera vez por los pescadores peruanos. Sin embargo, la profundidad de los daños y la capacidad de la gente para prepararse ante estos desastres y luego recuperarse, no se determina sólo por los vientos, la lluvia o los temblores de tierra, sino por las circunstancias sociales y económicas de quienes ahí habitan. El impacto devastador del huracán Mitch en América Central, por ejemplo, se debió en gran parte a la deforestación de los barrancos, pues durante años los campesinos pobres se han visto forzados a labrar parcelas altas e inestables, ya que las mejores tierras de la costa han permanecido en manos de las elites nacionales y de las empresas multinacionales para la producción de cultivos de exportación.

Las personas de escasos recursos son las que padecen con más fuerza las secuelas del daño y degradación ambiental, como la deforestación, la contaminación del agua y la erosión de los suelos. En otras palabras, son los pobres los más vulnerables ante las consecuencias de la presión que ejerce el mundo moderno sobre el medio ambiente.

Deforestación

La deforestación y la pérdida de otros hábitats han acabado con cerca del 70 por ciento de los bosques húmedos de América Central. Los pequeños bosques que aún quedan en Trinidad, Jamaica, Haití, República Dominicana y Costa Rica están desapareciendo rápidamente. Alrededor del 14 y 25 por ciento de la selva amazónica

brasileña (una superficie del tamaño de Francia) ha sido totalmente destruida, y las estimaciones recientes para la región del Amazonas (ubicada en Brasil y en otros ocho países como Perú y Ecuador) dan muestra de una continua deforestación. En la medida que los países de Asia Oriental y del Sur agotan sus provisiones de madera, éstos han incrementado su dependencia de los proveedores de América Latina. Informes provenientes de las Guyanas (Surinam, Guayana francesa y Guyana) señalan que existen enormes concesiones de madera en manos de empresas coreanas, indonesias y malasias. Asimismo, también se ha informado de transacciones madereras para la exportación en Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala y Perú.

La combinación de guerras y pobreza, más la concentración cada vez mayor de la tenencia de la tierra en manos de la elite, han empujado a que la gente se dirija hacia las zonas forestales aún existentes. En Haití, el país más deforestado de la región, sólo queda un dos por ciento de las tierras boscosas. El daño más profundo ha sido causado por la explotación forestal comercial, aunque los altos niveles de pobreza en Haití han influido también. Es necesario cortar árboles para adquirir carbón vegetal, algo indispensable para cocinar en la mayoría de los hogares haitianos. Además, para obtener dinero la gente puede vender madera para hacer carbón. Para la mayoría de los haitianos, la necesidad de proveer a sus familias de un plato de comida constituye un incentivo mucho más fuerte que la de proteger el medio ambiente. Los resultados también pueden ser trágicos, pues algunos analistas consideran que las centenas de muertes que se dieron tras las inundaciones de mayo de 2004 en Haití se debieron a la deforestación.

Una estrategia para proteger la cubierta forestal remanente es mediante la creación de parques y reservas. Como promedio, alrededor del 15 por ciento de la tierra en América Central y el Caribe, y el 10 por ciento de la tierra en las naciones de América del Sur se encuentra ahora oficialmente “protegida” en forma de parques y otras zonas de reserva. No obstante, para que esto sea efectivo es necesario que tales parques equilibren la protección ambiental con las necesidades humanas. Las iniciativas de conservación anteriores tendían en sus planes de ordenación forestal a excluir del lugar a la gente y sus actividades, lo que obligaba a los residentes originales y de reciente ingreso a establecerse en la periferia de las áreas protegidas lo que creaba un clima de resentimiento y hostilidad. En

vista de que las iniciativas de conservación dejaban fuera a la gente del lugar, las tensiones con respecto de la tierra y los recursos naturales se intensificaban, y los resultados no satisfacían ni a unos ni a otros.

Los nuevos enfoques intentan abordar las deficiencias de los sistemas de parques tradicionales con la inclusión de la gente del lugar en la planificación y el manejo de las áreas de conservación. Las reservas de biósfera, cuyo proyecto pionero es el de las Naciones Unidas conocido como “El Hombre y la Biósfera” (UNESCO), consisten de un área “núcleo” protegida, libre de seres humanos y rodeada de ‘zonas de amortiguamiento’ para fines de investigación, recreación, ecoturismo, educación ambiental y la extracción de productos forestales renovables por los habitantes locales; y una zona externa de “transición” para habitación humana y empresas privadas. Con la intención de proveer un espacio para el sustento humano y la conservación ecológica, desde el inicio del proyecto en 1976 el sistema se ha ampliado para incluir alrededor de 337 reservas en 85 países. Con la participación y el apoyo local, estas iniciativas pueden contribuir a atenuar e incluso detener la destrucción forestal.

Contaminación del agua

América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, en la que 380 millones de sus 507 millones de habitantes – tres cuartos de la población de la región – viven en ciudades. Por ello, la región difiere completamente de Asia y África, donde sólo un 30 o 35 por ciento de la población vive en zonas urbanas. Hoy en día, existe un increíble número de 52 ciudades en América Latina con más de un millón de habitantes, y hay cuatro enormes urbes casi inimaginables en cuanto a su escala: 12,5 millones en el gran Río de Janeiro, 13 millones en la zona metropolitana de Buenos Aires, 22 millones en el gran Sao Paulo y 25,6 millones en toda la extensión de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo.

Para los habitantes urbanos, las cuestiones ambientales relacionadas con la tierra y el agua constituyen agudos problemas. Entre ellos están la falta de agua potable, las aguas negras sin tratamiento, el vertimiento inapropiado de desechos sólidos (basura), las tierras contaminadas por instalaciones industriales y el crecimiento urbano en expansión que destruye las reservas de agua potable y otras áreas protegidas. Tal como señala Carlos Minc, de

Brasil, “La economía en el Tercer Mundo comienza con el agua, la basura, y las aguas negras. Aquí, el ‘agujero en la capa de ozono’ está justo en la superficie, dentro de la casa.”¹ Algunas estimaciones atribuyen al agua contaminada hasta el 80 por ciento de las enfermedades de la región y un tercio de las muertes, lo cual representa una clara fuente de miseria y peligro urbano.

La mayoría de casas y edificios de departamentos y oficinas en las grandes ciudades tienen agua corriente y cañerías de desagüe para aguas residuales. Los promedios nacionales que arrojan las estadísticas oficiales indican que entre el 60 y el 100 por ciento de las casas tienen “acceso a los servicios sanitarios”.² Sin embargo, resulta terrible descubrir que casi todas las aguas negras se desaguan río abajo o hacia el mar sin tratamiento alguno. A comienzos de los años 90, Santiago de Chile sólo trataba el cuatro por ciento de las aguas residuales, Buenos Aires el cinco por ciento y Sao Paulo el diez por ciento. Las aguas negras a menudo son descargadas en canales de desagüe abierto que fluyen hacia los ríos urbanos.

Inevitablemente, las personas más pobres son las que se ven más directamente afectadas por esto. En muchos casos, se ven obligadas a construir sus casas a orillas de los ríos o canales de desagüe porque es el único sitio donde sus medios les permiten vivir. Cuando viene una crecida de agua tales residentes padecen la putrefacción, no sólo a través de la vista y el olfato, sino porque el agua inunda sus hogares. Incluso sin estas inundaciones, el hecho de vivir a orillas de donde se depositan las aguas residuales hace que los residentes están expuestos a diario a los gérmenes que éstas conllevan. Los niños pobres son los más afectados, ya que sus sistemas inmunológicos aún en desarrollo los deja expuestos ante la carencia de una infraestructura de agua potable y alcantarillado. Dada la cantidad de enfermedades fatales y debilitantes causadas por la contaminación “oral fecal”, decir que las “heces humanas siguen siendo el contaminador más peligroso del mundo” pinta claramente tal situación.³

Erosión, degradación y contaminación de los suelos

Otro gran contaminante sin duda se ha dado con los métodos agrícolas modernos, los que han deteriorado la tierra y han afectado adversamente las posibilidades de los pobres que depende de la tierra para su sustento.

En las décadas de los años 60 y 70, en un intento por

“modernizar” la agricultura y vigorizar la producción (y las ganancias de las empresas agrícolas), los Estados Unidos y México ingeniaron un sistema que era radical para la época: reemplazar las prácticas agrícolas tradicionales con el monocultivo mecanizado, construir enormes sistemas de riego y utilizar semillas híbridas de alto rendimiento producidas en parcelas de investigación con agroquímicos específicos a los granos para fertilizar las plantas y controlar las plagas. El programa se exportó como parte de los proyectos de ayuda de los Estados Unidos para asistir en el desarrollo del “Tercer Mundo” y abordar la pobreza y el estancamiento económico, pero se diseñó también para vigorizar las ganancias empresariales y crear mercados para los productos norteamericanos.

La Revolución Verde, como llegó a conocerse el proceso, transformó las tierras que antes eran inaccesibles en campos productivos y aumentó exponencialmente los rendimientos del suelo basados a menudo en cultivos de exportación como el azúcar y el algodón. Anunciado como una solución todopoderosa para aliviar las presiones tecnológicas, económicas y demográficas, la Revolución Verde se consideró como el medio más rápido de generar el capital necesario para alcanzar la modernización.

Sin embargo, la Revolución Verde no fue implementada en un vacío social, de modo que no llegó a aliviar el hambre y la pobreza de las naciones en desarrollo. Primero, la Revolución Verde cimentó la posición económica de América Latina como proveedora de productos agrícolas primarios, y creó una dependencia tecnológica de semillas, plaguicidas y maquinaria importada. En muchos lugares, la producción de alimentos fue una actividad que se hizo a un lado en favor de productos de exportación. Asimismo, reforzó e intensificó la brecha económica y social que ha dividido los pueblos latinoamericanos por siglos. Los grandes latifundistas de las elites coloniales y algunos agricultores más adinerados adoptaron las nuevas tecnologías y mejoraron su situación económica, dejando que los pobres se deslizaran aún más hacia la marginalidad y hacia una condición de trabajadores asalariados.

La Revolución Verde ha conducido también a una degradación ambiental general. Las grandes plantaciones que producen cultivos de exportación y los agricultores locales que practican la explotación agrícola de pequeña escala han empujado las tierras de América Central y el Caribe a terribles estados de erosión y contaminación.

Un serio legado de la Revolución Verde es la fuerte dependencia de agroquímicos. De 1970 a 1996, el uso mundial de plaguicidas se incrementó en 3,300 por ciento. Para 1997, los plaguicidas significaron mundialmente una industria de 32 mil millones de dólares americanos. En América Central, un promedio de 58 kilogramos de fertilizante se aplica a cada hectárea por año (en algunas economías de exportación agrícola altamente competitivas como la de Costa Rica, la cifra se eleva a 243 kilogramos por año).

Estos plaguicidas tienen efectos directos sobre los seres humanos y el medio ambiente. Comunidades enteras se han visto expuestas por largo tiempo a estos productos químicos (lo cual habitualmente se ignora o pasa por alto, aunque ocasionalmente el grado al que han sido expuestas es tal que llega a trascender a la opinión pública). Los campesinos que trabajan los campos están expuestos rutinaria y agudamente a estos contaminantes y, como consecuencia de la fumigación aérea, sus familias y la comunidad en general también beben agua contaminada o respiran los residuos químicos que arrastra el aire y penetra sus hogares y escuelas.

Gran parte de la tierra misma se ha agotado. La degradación de la tierra es ahora severa en toda la región, especialmente en México y América Central. Informes recientes indican que un 40 por ciento de la tierra en América Central y México ha reducido su productividad debido a la erosión. Esta cifra se eleva a un aterrador 77 por ciento en el caso de El Salvador. Más de la mitad de las tierras de la mayoría de los países están ahora clasificadas por Conservación Internacional y el World Research Institute como “perturbadas por la intervención humana”.

A lo largo de décadas, la agricultura intensiva desarrollada por los grandes terratenientes motivados por el afán de lucro (entre éstos, las empresas transnacionales), ha extenuado los recursos de las áreas fértiles de las tierras bajas y las ha obligado a depender excesivamente de los productos químicos agrícolas. Entretanto, el rápido crecimiento demográfico combinado con el poco acceso a tierras adecuadas ha obligado a los pequeños agricultores a dirigirse a tierras marginales áridas, barrancos o de pastoreo. Limitados por las presiones que impone la pobreza, muchos de estos agricultores se han visto forzados a adoptar métodos de corto plazo de producción agrícola, los cuales son ecológicamente insostenibles y aumentan su vulnerabilidad a las consecuencias del daño causado al medio ambiente.

Cambio climático y vulnerabilidad ambiental

A medida que el cambio climático gana fuerza (problema ambiental del cual las naciones ricas son las principales responsables), también ha aumentado la frecuencia, magnitud y duración de los huracanes, las inundaciones y las sequías que azotan a América Latina. La situación podría describirse como una de “injusticia climática”, en vista de que los mayores responsables no sufren grandes daños, mientras que aquellos que padecen lo peor – en cuanto a costos humanos, económicos y ambientales – apenas han contribuido al problema.⁴

El hecho de que los países más pobres y vulnerables padecen las peores consecuencias del cambio climático se ilustra de forma dramática con el caso de Honduras, donde la devastación que causó el huracán Mitch mostró la vulnerabilidad socialmente desigual de las consecuencias del cambio climático global.

Aunque los estragos que causó el huracán Mitch fueron realmente devastadores en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a menudo es Honduras el país considerado como el caso clásico de vulnerabilidad física, económica, social y ambiental en la región. Dentro de la clasificación internacional, el 73 por ciento de su población vive por debajo de la línea de pobreza, el 30 por ciento se encuentra en extrema pobreza, la tasa de crecimiento demográfico se sitúa entre las más altas en el mundo (3.4 por ciento) y la población urbana de la capital, Tegucigalpa, ha crecido cinco veces desde 1960. En 1998, tres cuartas partes de toda la tierra estaban en manos de sólo 228 terratenientes. La abrumadora mayoría de los hondureños han sido obligados a vivir en zonas marginales, en especial en laderas empinadas en las afueras de las ciudades (donde pueden subsistir económicamente y tener acceso a trabajos). El gobierno se encuentra inmovilizado por un enorme déficit comercial, una inflación creciente, poca inversión extranjera y una deuda externa de 4.3 mil millones de dólares americanos, al tiempo que lucha por proveer a sus ciudadanos de los servicios más básicos.

En octubre de 1998, el huracán Mitch dejó caer en dos días 1.82 m (seis pies) de agua, o el equivalente de un año de lluvia. A medida que las lluvias torrenciales caían sobre montañas y colinas, el volumen de los ríos aumentó descontroladamente, en algunos casos a mucho más de 9 metros de altura (30 pies) y 457 metros de ancho (1.500 pies). El río Choculeta se desbordó cerca de una de las

ciudades más grandes de la nación, creando “una aterradora laguna de aguas residuales sin tratamiento y afluentes químicos en que flotaban los cadáveres”.⁵ La Encuesta Geológica de los Estados Unidos estimó que hubo más de un millón de desprendimientos de tierra y aludes, exacerbados por la vulnerabilidad ambiental como resultado de décadas de mal manejo de recursos. La enorme deforestación dio como resultado que cuando cayeron las lluvias, éstas también lavaron la capa superficial de los suelos de las tierras altas deforestadas.

Con sólo cuatro helicópteros a su disposición, el gobierno de Honduras tuvo que enfrentar un país en donde el 60 por ciento de la tierra estaba sepultada por lodo y agua. Al final, 17,000 personas murieron o desaparecieron, un millón quedó sin hogar, 94 puentes fueron destruidos, la vital industria bananera quedó en ruinas, el 70 por ciento de la infraestructura del país sufrió severos daños y los costos de reconstrucción se estimaron en 5 mil millones de dólares norteamericanos. Frente a una severa carencia de ingresos, el presidente Carlos Flores anunció que el gran peso de la reconstrucción tendrían que cargarlo las comunidades locales y no el gobierno.

Tras el huracán vino el segundo y “silencioso” desastre: las enfermedades infecciosas. Las desbordantes y crecidas aguas enlodadas llevaban exceso de desechos y cadáveres a través del país; las cañerías de alcantarillado rotas y las letrinas se filtraban en las crecidas; y la contaminación no tardó en convertirse en cólera. La diarrea, resultado de la deshidratación y de las aguas contaminadas (y la causa principal de muerte infantil en el mundo entero), se tornó particularmente aguda, y se originó también la leptospirosis, enfermedad transmitida por roedores y por exponerse a aguas contaminadas con orina animal. Los mosquitos comenzaron a proliferar en las aguas estancadas, lo que aumentó la transmisión de virus de dengue y malaria.

El huracán Mitch ilustra perfectamente la forma en que las personas más pobres, y los entornos en los cuales viven, corren más riesgo ante los fenómenos climáticos extremos. Dada la intensidad del huracán (posiblemente exacerbada por el recalentamiento atmosférico) y su devastador impacto (empeorado por las condiciones de pobreza experimentada por la inmensa mayoría de hondureños y la degradación ambiental que resulta del mal manejo de los recursos), sería más apropiado en este sentido hablar de desastres provocados

tanto por el hombre como por la naturaleza. Sin embargo, los Estados Unidos – el país que más contribuye al recalentamiento atmosférico – rehúsa firmar el Protocolo de Kyoto. El Protocolo de Kyoto solamente aminorará el recalentamiento atmosférico, no hará reversible su acción; pero es un paso en la dirección correcta. Para que los países en desarrollo, desde Bangladesh a Haití y la República Dominicana, no continúen sufriendo los efectos de la “injusticia climática”, el mundo debe encontrar entonces la voluntad política para poner en práctica el protocolo, con o sin el apoyo de los Estados Unidos.

Raíces de la vulnerabilidad

La historia del huracán Mitch también apunta a los complejos problemas que constituyen las raíces de la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe. A nivel micro están las intervenciones humanas individuales, partiendo de los campesinos pobres forzados a ejercer prácticas insostenibles por las necesidades a corto plazo e inmediatas de alimentar a sus familias, hasta los políticos regionales y nacionales que adoptan opciones destructivas, influidos por incentivos perversos y su egoísmo. Entre los puntos que hay que abordar están las relaciones del poder local que norma la injusta toma de decisiones y los niveles de conciencia pública sobre las cuestiones ambientales.

Incluso donde hay conciencia de los problemas ambientales, a menudo no existe la capacidad para actuar a nivel personal. Por ejemplo, botar basura de forma inapropiada es muy común en toda la región, en donde grandes cantidades de basura contaminan y atascan alcantarillados, zanjas, arroyos, lagos y tierra. No obstante, sin depósitos convenientes ni servicios confiables y económicamente viables para recoger la basura, el intentar cambiar el comportamiento de las personas mediante campañas educativas es muy probable que dé escasos resultados.

Entretanto, la débil infraestructura pública y la corrupción hacen que, con frecuencia, los reglamentos que atañen al medio ambiente no se apliquen correctamente. Por ejemplo, las altas esferas de la administración pública responsabilizan a las administraciones locales de la limpieza ambiental, las que a su vez carecen de la capacidad y los recursos para implementarla.

La tendencia prevaeciente en toda la región es excluir a los residentes locales de la planificación del uso de los recursos naturales. Los grandes terratenientes, las elites urbanas y los burócratas de la

administración pública controlan la planificación regional, aunque a menudo residen en el estado o en la capital federal, a bastante distancia de la región en cuestión. Algunas veces, recurren a los aportes de consultores extranjeros, muchos de los cuales ven la región de manera instrumental, como fuente de materia prima para la exportación.

En muchos países, los consejeros municipales y las organizaciones de la sociedad civil comienzan a desafiar estas formas establecidas de hacer las cosas: por ejemplo, en El Salvador y Honduras, las organizaciones locales están trabajando para crear mecanismos tendientes a que las poblaciones locales participen en la planificación y la conservación del agua. No obstante, estas iniciativas locales no pueden lidiar con las principales causas estructurales de la vulnerabilidad ambiental que yacen en el nivel macro. Las grandes deudas externas, los programas de ajuste estructural que los países están obligados a implementar y las políticas asociadas a la globalización económica como la liberalización del comercio y la inversión, crean presiones sobre los gobiernos para que piensen en términos económicos y ambientales en el corto plazo.

Deuda

Tras la decisión de la OPEP en 1973 de cuadruplicar el precio del petróleo y los cambios en la política fiscal norteamericana, se desarrollaron una serie de eventos que finalmente dejarían a América Latina – y a casi todo el resto del mundo en desarrollo – con enormes cantidades de deuda externa sobre sus espaldas. Las naciones ricas en petróleo estaban ávidas de invertir sus nuevos ingresos provenientes del petróleo en bancos comerciales del Norte, los que buscaron nuevos mercados de empréstitos para este dinero. Gran parte de estos recursos se prestó a países en desarrollo, cuyos líderes se encontraron de pronto inundados de fuertes divisas y comenzaron a invertir grandes cantidades en proyectos de desarrollo (muchos de los cuales fueron grandes “proyectos faraónicos”), en sus ejércitos y en algunos “gastos personales” que alimentaron la corrupción. Luego, en 1979, la OPEP aumentó nuevamente los precios del petróleo y Estados Unidos redujo su suministro monetario. Esto tuvo el efecto devastador de elevar las tasas de interés internacionales y dejar a gran parte del mundo en desarrollo – que pagaba tasas de interés variables por sus préstamos – con cargas opresivas de deuda.

Los medios de comunicación en general han dejado de hablar sobre este tema desde la “crisis de la deuda” de mediados de la década de los 80, aunque la magnitud de la deuda es ahora más alarmante que nunca. En 1999, América Latina debía 41.4 por ciento de su Producto Interno Bruto total a los donantes oficiales y los bancos comerciales.

La carga de la deuda ha tenido un efecto directo sobre el medio ambiente debido a la necesidad de generar divisas mediante la explotación y exportación de recursos naturales para continuar pagando los intereses sobre la deuda. Este énfasis en la promoción de exportaciones le ha costado caro a América Latina, tanto en su aspecto social como ambiental. Nicaragua, para citar sólo un ejemplo, ha experimentado anormales niveles de deforestación como consecuencia directa de los préstamos de ajuste estructural (y de sus políticas). Después de firmar un préstamo Financiero de Emergencia de Ajuste Estructural con el FMI en 1994, sus bosques comenzaron a desaparecer a una velocidad asombrosa (aproximadamente 150.000 hectáreas al año) mientras que la extracción maderera y la producción agrícola para la exportación aumentaron considerablemente.

Al necesitar nuevos préstamos sólo para pagar los intereses de la deuda original, los países latinoamericanos no han tenido otra opción más que aceptar los acuerdos y las condiciones de los préstamos del Banco Mundial y del FMI, generando efectos “indirectos” igualmente dañinos para el medio ambiente. En Nicaragua, el requisito del FMI al gobierno de que recortara los subsidios de crédito a los trabajadores agrícolas para reducir la inflación, empujó a los campesinos a adentrarse más en los bosques nacionales. Como lo explica Friends of the Earth en su cáustica reseña sobre los préstamos del FMI: “los pequeños y medianos agricultores que fueron severamente golpeados por estos recortes, se vieron forzados a despejar áreas de terreno boscoso para sembrar cultivos de subsistencia, lo cual ha reducido aún más los bosques del país.”⁶

Entre las condiciones típicas del ajuste estructural impuestas sobre los países en desarrollo están la reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales, la revisión de los códigos fiscales, la liberalización de los mercados comerciales y financieros, la eliminación de subsidios y el control de precios, así como la

implementación de altas tasas de interés para frenar la inflación. En muchos casos, estas medidas de ajuste estructural han generado nuevas corrientes de pobreza y desesperación en la región y han forzado a que las personas indigentes adopten una serie de prácticas insostenibles, como ocupar ilegalmente tierras en las selvas húmedas o vivir en barriadas a lo largo de zanjas anegadas de aguas negras.

En cuanto a empleos, el hecho de haber dado de baja a un gran número de empleados ha tenido repercusiones serias entre la clase media y las mujeres de la región. Miles de empleados técnicos y profesionales perdieron sus trabajos. En sociedades donde las oportunidades profesionales son limitadas para las mujeres, los empleos estatales han constituido normalmente la única opción de movilidad laboral. Las repercusiones ambientales de estos despidos son directas: miles de maestros, doctores, agrónomos, trabajadores en el ministerio del medio ambiente y guardabosques perdieron sus empleos. Incluso en los casos menos drásticos cuando se congelaron o hubo recortes de los contratos de trabajo o los salarios, los mejores empleados públicos que pudieron hacerlo lograron colocarse en el sector privado. Los primeros lugares que perdieron su personal clave fueron las oficinas rurales, las que tenían ya un personal limitado en cuanto a agrónomos se refiere. En estos casos, se dañó la eficiencia de las oficinas y la moral cayó por los suelos. Como consecuencia, los programas de conservación y las normas ambientales a menudo languidecieron.

Comercio

La carga de la deuda y el consiguiente énfasis que se dio al desarrollo basado en las exportaciones de los recursos naturales ha fijado barreras casi insuperables para el desarrollo económico sostenible y la ordenación ambiental para la gran mayoría de los países en desarrollo. Los problemas que enfrentan esas naciones no son meramente, como lo sostienen algunos, el resultado de la corrupción o de actividades o medidas irresponsables. Más bien, los países menos desarrollados no han conseguido escapar del círculo vicioso de la deuda y la explotación de los recursos debido a las fuertes limitaciones que impone el orden económico mundial prevaleciente.

En 1817, David Ricardo expuso la idea de que cada nación tenía una “ventaja comparativa” – es decir, una capacidad para producir un producto o proveer un servicio de modo más eficiente que otras – y

que todas las naciones salían ganando si se especializaban en aquellos productos y comerciaban el resto entre ellas. En la década de los años 1930, Eli Hecksher y Bertil Ohlin sostuvieron que, si se especializaban en sus “ventajas comparativas”, todas las naciones podrían lograr ventajas de bienestar absoluto mediante el comercio internacional. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los teóricos comerciales coincidían en que la mejor ruta para el crecimiento económico estaba en el libre intercambio de bienes y servicios.

Sin embargo, la imperfección de esta teoría – especialmente en relación a los países en desarrollo que no tienen economías diversificadas y que dependen excesivamente de una gama limitada de exportaciones – es que se basa en una hipótesis no realista de precios estables. Muchos de los países en desarrollo han sido fuertemente golpeados por el deterioro a largo plazo de los precios relativos a sus exportaciones (conocido en la jerga económica como sus “términos comerciales”). Pese a las obvias implicaciones ambientales de ser un exportador neto de recursos naturales, este tipo de deterioro de los términos comerciales conlleva a que las naciones pobres – que comprende la vasta mayoría de los exportadores de productos primarios – tienen que “producir” más recursos naturales a lo largo del tiempo simplemente para mantener el mismo nivel de ingresos que derivan las exportaciones. En la economía mundial, los ingresos de exportación son cruciales para dar a estos países la oportunidad ya no de adquirir ingresos sino de subsistir (ya no se diga de progresar). Sin las divisas extranjeras, uno no puede pagar por las importaciones, los servicios de la deuda, participar en organizaciones internacionales y otras cosas. De ahí que los exportadores de manufacturas industriales o servicios de alto valor se encuentran en el pico más alto que comandan la economía mundial, mientras que otros – los exportadores de sus recursos naturales – se quedan estancados en los escalones más bajos de la jerarquía económica mundial, condenados a incrementar la explotación de sus recursos naturales nada más para mantenerse a flote.

Roldan Muradian y Joan Martinez-Alier han documentado el patrón de comportamiento de los países latinoamericanos al responder a estas alarmantes caídas de los precios.⁷ Su análisis corrobora la afirmación de que la caída de los precios guarda estrecha relación con las campañas de fomento de grandes exportaciones de

productos primarios (materias primas). Sobre esta base, ellos sostienen que los países del Sur están experimentando un empeoramiento en sus “términos comerciales de índole ambiental”. Es decir, soportan cargas ambientales desproporcionadas en sus países simplemente porque tienen “ventajas naturales comparativas” en productos primarios.

Además de esta tendencia perturbadora en los precios de exportación, los mercados de productos básicos a menudo muestran una volatilidad extrema. Esto plantea una serie de problemas para los países basados en una exportación poco diversificada. Para los países pobres, el “fracaso” de un producto básico conlleva a un enorme déficit de ingresos públicos y, por lo tanto, a menos servicios públicos como la salud, la educación y la protección del medio ambiente. De hecho, la mayoría de los países que dependen de la extracción y la exportación de sus recursos naturales ya tienen instituciones nacionales poco desarrolladas que no están capacitadas para prestar servicios públicos básicos. La reducida infraestructura de exportación de una nación también frena el grado de “participación y rendición de cuentas” democrática y la movilización eficaz de los grupos de la sociedad civil del país.⁸ Además, los gobiernos represivos que no tienen que rendir cuentas a nadie encuentran fácil ignorar las exigencias de los activistas ecológicos.

Entretanto, las normas comerciales impuestas por los “países ricos” del mundo aseguran que los “países pobres” se mantengan firmemente inmovilizados. En México, tras la introducción del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLC/NAFTA) en 1994, los pequeños productores de maíz se enfrentaron a una situación casi imposible de ganar, al competir con la producción industrializada y subsidiada de maíz de los Estados Unidos. En países como México, Honduras y Nicaragua no hay fuentes alternativas de empleo para millones de trabajadores rurales con un nivel mínimo de educación. Prácticamente no existen medidas de protección social que cubran la salud o el desempleo. Con frecuencia, las consecuencias de lo anterior han sido el hambre y la disolución de las relaciones familiares y comunitarias – y posiblemente hayan trastornos mucho mayores si se implementa el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Lo irónico de todo esto es que los Estados Unidos y Europa, los partidarios más fuertes de la liberalización del comercio, continúan

subsidiando a sus productores agrícolas mientras que las condiciones impuestas a los programas de ajuste estructural impiden que los países en desarrollo hagan lo mismo. La liberalización del comercio significa que los países en desarrollo no pueden implementar políticas para apoyar a los pequeños y medianos agricultores ni promover prácticas agrícolas sostenibles para la protección del medio ambiente.

Inversión

Estudios recientes sobre cadenas de productos comerciales básicos que rastrean sus fuentes originales, desde sus componentes como materia prima hasta su transformación, montaje y venta, muestran claramente las desigualdades en el sistema, al documentar dónde, dentro de la cadena de producción, se acumula la mayoría de las ganancias. La mayoría de las naciones pobres están estancadas en los eslabones de valor más bajo de suministro de mano de obra y recursos baratos, mientras que las naciones ricas continúan desarrollando las etapas más rentables como la investigación, el desarrollo y mercadeo de los productos. El ejemplo de la explotación transnacional de minas y petroleras, muestra cómo el sistema explota los recursos de las naciones pobres para el beneficio de las clases adineradas de los países del Norte. Sin embargo, esto genera pocos beneficios para la vasta mayoría de naciones y pueblos del mundo, al mismo tiempo que saquean sus entornos ambientales.

Con el fin de mantener estos recursos y mano de obra baratos, y para satisfacer así a los inversionistas y compradores del Norte, las naciones pobres desalientan a los activistas ambientales y los sindicatos. Alrededor del mundo se han establecidos zonas francas industriales (conocidas también como zonas de libre comercio) que brindan paraísos fiscales a las plantas de montaje, aunque se les ha cuestionado por sus prácticas laborales represivas y por generar pocos “efectos multiplicadores” en la economía local. Las empresas que realizan diferentes etapas del montaje en diferentes naciones han recibido críticas por evadir impuestos, lo cual logran al reducir el valor de sus productos exportados declarado en sus propios informes. Este proceso llamado “transferencia en la fijación de precios”, limita la capacidad de las naciones de utilizar los ingresos tributarios para abordar los costos de orden social y ambiental generados en estas zonas y sus fábricas.

Muchas de estas zonas están ubicadas lejos de la capital o ciudad principal, para aprovechar recursos, viviendas y mano de obra baratos. Estos “campos verdes” se eligen también para evitar los centros urbanos donde los sindicatos han tenido éxito en organizar a los trabajadores para exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Para atraer a las empresas a estos sitios y extraer sus recursos naturales, muchas autoridades públicas han provisto a estos lugares con infraestructura como electricidad, caminos, servicios de agua potable y de alcantarillado, además de “vacaciones tributarias especiales” (exención de impuestos). En algunos casos, la dotación de energía a menor costo ha significado que los gobiernos han tenido que construir centrales eléctricas a carbón y también enormes presas hidroeléctricas, con las consecuencias sociales y ambientales que esto conlleva.

Muchas industrias altamente contaminantes se han instalado en el mundo en desarrollo. Algunas industrias han visto cómo fábrica tras fábrica se cierra, sólo para volver a abrirse en otra parte, donde los salarios son más bajos y las leyes sobre el medio ambiente débiles o simplemente no se aplican. Un asunto constante y sin resolver es el grado en el cual el libre comercio y la inversión aplastarán los esfuerzos locales para regular el daño ambiental. NAFTA/CAFTA y ALCA plantearon la posibilidad de que presenciemos una carrera ambiental “hacia el abismo”.⁹

En vista de que los países desarrollados dependen cada vez más de los recursos y de los trabajadores industriales del Sur, las consecuencias ambientales de los bienes y servicios que consumen las personas de las naciones del Norte han sido heredadas por el mundo en desarrollo. Las naciones ricas consumen hoy muchos más recursos naturales que nunca – en términos absolutos y relativos – y para hacerlo simplemente importan productos que implican un uso de materiales y energía intensivos del Sur para satisfacer sus estilos de vida, dejando así a las naciones subdesarrolladas la carga ambiental de la extracción de recursos y la polución industrial que provienen de la elaboración de tales productos. En otras palabras, las naciones ricas “evaden” las consecuencias materiales de los bienes y servicios que consumen.

Asistencia financiera

Comparado con el saldo de la deuda de América Latina, los flujos de

asistencia financiera podrían parecer en principio como una gota en el océano. Sin embargo, en los países que carecen de capital, los flujos de ayuda extranjera tienen a menudo un “efecto catalizador” para otras grandes fuentes de inversión. Por ejemplo, los inversionistas privados con frecuencia toman en cuenta la intervención del FMI y el Banco Mundial en los proyectos de desarrollo, como un “sello de aprobación por buena administración”, que envía señales de confianza sobre políticas económicas sólidas y de buen gobierno y, por lo tanto, atrae fuentes adicionales de financiamiento público y privado. Por lo mismo, muchos críticos han acusado a estas instituciones financieras internacionales de impulsar nuevos ciclos de degradación en América Latina y el Caribe.

El argumento sostenido por muchos es que el énfasis por financiar “megaproyectos” de desarrollo agudiza la lógica de encontrar productos básicos de exportación rápida que a la larga podrían perjudicar al medio ambiente. Los megaproyectos son notorios por su facilidad en iniciarlos, pero debido a que los Estados débiles encuentran tremendamente difícil implantar reglamentos sociales y ambientales significativos, la capacidad que tienen para mitigar el impacto de tales proyectos es sumamente limitada. Como resultado, muchos megaproyectos han tenido consecuencias ambientales devastadoras y algunos han recibido fuertes críticas con relación a sus cuestionables beneficios al bienestar humano. Las poblaciones originales ubicadas en hábitats naturales relativamente sin perturbar son a menudo las principales víctimas. Algo ampliamente divulgado se refiere a la corrupción y la inclinación clasista y urbana; en vista de esto, se considera que muchos de los megaproyectos que reciben financiamiento externo sólo han servido para el beneficio de las elites políticas y de los contratistas con buenas conexiones con el gobierno. A menudo ha sido necesario que los ambientalistas ejerzan fuertes presiones políticas para que se logren algunos cambios en este sentido, o incluso para realizar ligeras evaluaciones del impacto ambiental o social.

Un ejemplo de los impactos sociales y ambientales de los megaproyectos es el inmenso proyecto de extracción de hierro en Carajás al este del Amazonas brasileño. El Banco Mundial financió con 300 millones de dólares norteamericanos una parte crucial del proyecto, lo que dio paso a otros inversionistas. En 1980, el proyecto fue considerado como una prioridad para Brasil, cuando una

superficie de 895.000 kilómetros cuadrados (equivalente a Francia y Gran Bretaña juntos) fue destinada al Proyecto de la Gran Carajás. Se planificaron 800 kilómetros de vía férrea hacia el mar, una gigantesca presa hidroeléctrica, ciudades nuevas y carreteras de escala continental, a un costo de más de 3 mil millones de dólares. Para ayudar a generar productos de exportación y divisas para el pago de la deuda, se decidió crear una enorme zona de incentivo alrededor de la mina y el ferrocarril. En dicho plan, se talarían grandes superficies de bosque para dar lugar a las plantaciones, se inundarían enormes superficies de las tierras bajas para los proyectos hidroeléctricos y el combustible para 23 fundiciones de hierro colado bruto (fundiciones de acero crudo) sería el carbón vegetal proveniente de los bosques nativos.

Ambientalistas europeos y americanos se movilizaron en oposición al proyecto cuya dimensión se redujo considerablemente. No obstante, enormes ferrocarriles transportan actualmente más de 70 millones de toneladas del mineral hacia el mar cada año, donde son transbordadas a buques de carga con destino a Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia, Italia y los Estados Unidos. El costo ambiental ha sido inmenso, y el proyecto no habría despegado sin la intervención del Banco Mundial.

Conclusión

La desigualdad está al centro de la crisis ambiental de América Latina (desigualdad dentro de los países latinoamericanos, y a escala mundial entre los países de América Latina y las naciones ricas del Norte). Esta desigualdad tiene raíces coloniales, pero se refuerza con las estructuras prevalecientes de la asistencia financiera, el comercio, la deuda y la inversión.

Como hemos observado, los débiles cimientos económicos de América Latina se remontan a su inserción en la economía mundial como proveedora de materia prima para exportación. La minería y la agricultura a gran escala han contribuido seriamente a la deforestación y degradación ambiental general así como a la erosión del suelo y la contaminación del agua. Asimismo, han generado desigualdades y vulnerabilidades sociales y económicas inaceptables, como la concentración de tierras y el descuido de cultivos alimentarios en favor de cultivos comerciales para la exportación. La intensa especialización sobre una cantidad limitada de productos

básicos de exportación tiende a erosionar los esfuerzos por promover economías diversificadas de base comunitaria, que generan menos degradación ambiental y están más en armonía con las restricciones ecológicas locales.

La necesidad de generar divisas para pagar sus grandes deudas externas impide que los países de América Latina enfoquen el desarrollo económico de modo sostenible, y los deja sujetos a las recetas económicas neoliberales que promueven las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Estas instituciones imponen programas de ajuste estructural con condiciones tales como la liberalización del comercio y la privatización de los servicios públicos. La liberalización comercial mantiene esta pauta insostenible de desarrollo con énfasis en las exportaciones. Además, la “contracción del Estado” que exige el dogma neoliberal, a menudo ha producido una reducción radical de los servicios estatales anteriormente otorgados a los campesinos. El resultado ha sido el estancamiento económico y la pobreza.

Algo muy reconocido es que la pobreza y la degradación ambiental se refuerzan mutuamente. Los campesinos pobres se encuentran en un círculo vicioso. Las mejores tierras están en manos de una agroindustria dedicada a cultivar productos básicos de exportación. La mayoría de los pequeños agricultores no tienen más opción que cultivar en tierras marginales como barrancos empinados con suelos de poca calidad. Al cultivar estas tierras, no solamente causan daño ambiental sino que también perpetúan su pobreza, puesto que las tierras que utilizan son generalmente de baja producción y, como resultado del mal manejo de estos recursos, su productividad disminuye aún más. Por ello, su pobreza actúa como causa y efecto de la degradación ambiental.

Diariamente, la degradación ambiental disminuye enormemente la capacidad de los pobres para ganar su sustento, y consecuentemente repercute seriamente en su condición nutritiva y salud. Por ejemplo, la erosión del suelo como resultado de la deforestación conlleva un menor rendimiento agrícola. El resultado es, por una parte, menos productos para alimentar a la familia, y por la otra, menos productos para vender y, por lo tanto, menos ingresos económicos para su familia.

Como respuesta a esta situación, la agroecología o agricultura sostenible ha pasado a ser la estrategia clave para el sustento de los

campesinos pobres en América Latina y el Caribe. Este enfoque agrícola es más sostenible en el nivel ambiental, económico, cultural y social. Apartarse del monocultivo significa poner énfasis en la diversidad y la rotación de cultivos, conservar los recursos naturales, reducir el uso de agroquímicos artificiales, peligrosos y caros como los plaguicidas y herbicidas, y favorecer la agricultura en pequeña y mediana escala en vez de la concentración de tierras en manos de la agroindustria y grandes plantaciones y haciendas. Cuando la agricultura sostenible da prioridad a los cultivos básicos aborda también la necesidad de una seguridad alimentaria local.

Tales soluciones de menor escala y de base comunitaria pueden generar mejoras sorprendentes en el bienestar y la sostenibilidad del medio ambiente. Se puede utilizar una combinación de productos, tanto para la subsistencia como para los mercados locales y mundiales. Estas comunidades aprovechan mucho más la diversidad biológica y utilizan los recursos con mucho menos intensidad que la agricultura de exportación que practican las empresas transnacionales o sus contratistas y proveedores.

Sin embargo, para que los países latinoamericanos salgan de la trampa de la pobreza que los encierra en una espiral descendiente de degradación ambiental, la agricultura sostenible por sí sola no es suficiente. El desarrollo sostenible necesita un enfoque mucho más amplio que refleje las características socioeconómicas de estos países. El desarrollo no puede medirse en estrechos términos económicos como el Producto Interno Bruto de un país. Más bien, hay que prestar atención al desarrollo humano sostenible, la distribución de la riqueza, la seguridad alimentaria, la igualdad, la educación, la salud, el agua y la sostenibilidad ambiental. Si seguimos el enfoque neoliberal “adecuado para todos” para el desarrollo económico, como la liberalización del comercio y la privatización de los servicios públicos, continuaremos exacerbando las vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales de la región.

En cambio, lo que se debe dar a los gobiernos de América Latina es suficiente “espacio para políticas” que les permita diversificar sus economías. La persecución solamente de “ventajas naturales comparativas” y la dependencia sobre unos pocos productos básicos de exportación, encierra a los países pobres en su pobreza y en una mayor vulnerabilidad ambiental. Estas naciones enfrentan un problema estructural: ¿cómo salir de este círculo vicioso? En la

actualidad el impedimento yace en la carga de la deuda y en las normas que reglamentan el comercio mundial. Si los países desarrollados desean genuinamente contribuir a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, deben comenzar por condonar la deuda que coloca un obstáculo insuperable al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, genera degradación ambiental, tiene efectos devastadores en la gente común, y da paso a la constante intervención externa en sus economías por parte de las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Un ejemplo claro de esta intervención externa es forzar a los países en desarrollo a liberalizar sus comercios y privatizar sus servicios públicos, incluso cuando esto contribuye a exacerbar la pobreza y la vulnerabilidad ambiental.

Vivimos en un mundo estrechamente entrelazado y es importante comprender que la pobreza y la degradación ambiental en los países en desarrollo es consecuencia directa de las políticas y estructuras decididas e impuestas por las naciones ricas. Si realmente nos importa el mundo globalizado en que vivimos, entonces debemos reconocer que la lucha contra la vulnerabilidad ambiental es nuestra responsabilidad compartida.

Notas

Encontrará una lista completa en inglés de las referencias para este documento en el sitio Web de CIIR: www.ciir.org

- 1 Minc, C (2001) 'A ecologia nos barrancos da cidade' en Viana, G, Silva, M, y Diniz, N (eds.) *O desafio da sustentabilidade: Um debate socioambiental no Brasil*, Editora Fundação Perseu Abramo, São Paulo.
- 2 World Resources Institute (1996) *World resources 1996-97*, Oxford University Press, Nueva York, p153.
- 3 Ibid, p39.
- 4 Roberts, J T, y Parks, B (en prensa) *A climate of injustice: Global inequality and climate change*.
- 5 Las Sociedades de la Federación de la Cruz Roja Internacional y La Media Luna Roja (1999) *World disasters report*, Ginebra.
- 6 Friends of the Earth (1999) *The IMF: Selling the environment short*, Washington DC, p11.
- 7 Muradian, R, y Martinez-Alier, J (2001) *Globalisation and poverty: An ecological perspective*, Heinrich Boell Foundation, Berlin; y Muradian, R, y Martinez-Alier, J (2001) 'South-North materials flow: History and environmental repercussions' en *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 14(2): 171-187.
- 8 Roberts, J T, Parks, B, y Vásquez, A (2004) 'Who ratifies environmental treaties and why? – A world-system analysis of participation in 22 treaties by 192 nations' en *Global Environmental Politics* 4(3) (en prensa).
- 9 El reglamento de la Organización Mundial del Comercio es sumamente preocupante en este sentido, puesto que en la mayoría de los casos prohíbe a las naciones imponer límites sobre las importaciones por razones ambientales.